



FOTO: Archivo Particular

UN CUCHILLO EN PALACIO

Debo confesar que no podía dar crédito al escuchar esta semana a una funcionaria despedida de la Presidencia de la República decir al aire que en palacio había que andar con cuchillo para defenderse de un gobierno y un Presidente en campaña. Lo cierto es que ninguna entidad puede escapar al modo campaña que ha sido ordenado en forma clara y contundente y se ejecuta con precisión de relojería a todos los niveles del Estado.

Nunca antes habíamos visto un uso tan descartado del aparato público con multas electorales. Nombramientos y despidos masivos, ampliaciones de plantas de personal, cientos de millas de millones en nuevos contratos a pocos días de entrar en vigencia la ley de garantías, disminución de requisitos para ocupar cargos, intervención en política por parte de los funcionarios y un sinnúmero de anuncios populistas para comprar conciencias.

Los hechos de las últimas semanas son suficientemente elocuentes. Ochocientos nuevos puestos en Colpensiones. **Más de 6.000 en la UNP, muchos sin experiencia alguna en seguridad o inteligencia; más de 1.100 cargos adicionales en el Ministerio del Trabajo; cerca de 1.200 entre el Ministerio de Salud y la Dirección. Estamos hablando, como mínimo, de más de 600.000 millones de pesos en funcionamiento para “corbatas electorales”. Ni qué decir de los cerca de 6.000 contratos suscritos por varios ministerios y entidades, encabezados por Minminas, con 883, y Ambiente, con 720. Mientras tanto, el sistema de salud asfixiado, las obras públicas desfinanciadas y las Fuerzas Armadas sin ninguna capacidad operativa.** Los escándalos de corrupción asociados a la campaña política se acumulan, pero de la Contraloría General, nada, una entidad inexistente, solo anuncios, de ella no se conoce nada distinto a la velocidad con que avaló la compra de los aviones Gripen.

Y a todo este abuso con multas electorales se suma una batería de medidas económicas populistas, vendidas como “alivio” y diseñadas para producir rédito político inmediato, pero sin ningún respaldo fiscal. **La más elocuente, la alza populista del salario mínimo, cuyos impactos ya empezamos a ver, convertidos en desempleo e inflación. La segunda, el anuncio de restringir las inversiones de los fondos de pensiones en el exterior, cuyos nefastos efectos ya han sido advertidos hasta la saciedad. Más populismo.**

Y qué tal el desmonte de los pesares y la rebaja del precio de la gasolina, que tampoco cuentan con sustento fiscal y se prometen como alivio, ocultando que el costo real se traslada al presupuesto vía compensaciones, riesgos fiscales contingentes y demandas contra el Estado. **Pero qué importa si al mejor estilo del exministro Leyva tendrán que notificarles las condenas en la tumba.**

Resulta paradójico que mientras el Gobierno habla de crisis fiscal y se burla del Congreso y de

la independencia de poderes decretando una emergencia económica, que en buena hora la Corte suspendió, se dispara el gasto, la contratación y el clientelismo para comprar adhesiones políticas con los recursos de todos los colombianos.

A la estrategia de comprar las elecciones se suma aquella de abandonar el territorio a los grupos de delincuentes con quienes mantienen diálogos en el marco de su ‘paz total’. En cientos de municipios será muy difícil garantizar unas elecciones libres de presiones y amenazas.

Y a todas estas, ¿dónde están la Procuraduría y la Fiscalía? Silencio absoluto frente a la interferencia en política, frente al uso electoral del presupuesto, frente a la contratación masiva y frente a la presión indebida sobre entidades del Estado. Ni una palabra en materia disciplinaria o penal, cuando todas estas conductas están tipificadas como faltas gravísimas e incluso constitutivas de delitos.



**GERMÁN
VARGAS
LLERAS**

✕ German_Vargas
📷 germanvargaslleras